

**Situación de los Guaraní Kaiowá y Guaraní Nandéva en el Mato Grosso del Sur:
Acción inmediata o genocidio consentido por el Estado brasileiro**

Ante la secuencia de acciones de grupos armados contra comunidades Guaraní Kaiowá y Guaraní Nandéva durante los últimos treinta días en el Mato Grosso del Sur, que tuvieron como resultado muertes, heridas y traumas que serán cargados el resto de sus vidas por quienes las presenciaron, o el Estado brasileiro toma una posición clara e implementa las medidas necesarias y urgentes que de él se esperan, garantizando la realización de los derechos de este pueblo indígena en la región, como aseguran la Constitución Federal de 1988 y la normativa internacional, o su omisión quedará inscrita en los registros de la historia indígena y del indigenismo brasileiro, en esa región, como de clara connivencia con algo que parece ser una acción de exterminio planeado de un pueblo indígena, en pleno siglo XXI.

A lo largo de la última década no fueron pocas las señales e indicios de que se estaba avanzando para una situación crítica y asustadora de violencia sobre los Guaraní en el Mato Grosso del Sur (MS). Esto no quiere decir que la violencia no existiera antes de esto. Al contrario, sea velada o explícita, sea cotidiana o estructural y sistémica, ésta fue constitutiva de la sociedad plural y jerarquizada que allí se formó. Los hechos recientes solo exponen a la vista de un público más amplio el verdadero fundamento del orden colonial allí establecido: relaciones de dominación y explotación apoyadas en la fuerza bruta y la segregación, y sus consecuencias para los indígenas. La configuración de una situación de etnocidio y de genocidio.

El llamado *Informe Figueiredo*, de 1968, resultado de una comisión instituida por el Ministerio del Interior para examinar las irregularidades en el antiguo Servicio de Protección a los Indios (SPI), y que fue localizado en el contexto de las investigaciones realizadas por la *Comisión Nacional de la Verdad*, relata innumerables casos de torturas y violencias a las que fueron sometidos los Guaraní durante todo el periodo de colonización del Mato Grosso del Sur y del oeste del Paraná (PR), entre las décadas de 1940 y 1960. La 7ª Inspección de dicho órgano, con sede en Curitiba (Paraná), fue reconocida en la época como la más corrupta y violenta, actuando explícitamente en favor de los intereses de las madereras y de las empresas de colonización. En 1943, el gobierno Vargas creó la Colonia Agrícola Nacional de Dorados (CAND), sobreponiéndola a las tierras en las que vivían los Kaiowá y de las cuales obtenían su sustento de manera autónoma. Con el tiempo, las colonias se transformaron en haciendas y las selvas en áreas de pasto, labranzas y monocultivos extensivos. Esto llevó a que varias familias y comunidades Guaraní abandonaran sus lugares de residencia, sus cultivos, etc., y se desplazaran para otras regiones del país o inclusive para países vecinos. Para quienes permanecieron, fue necesario adaptarse dentro de lo posible a un paisaje en continua degradación ambiental y empobrecimiento material, confinados en pequeñas parcelas de tierra.

La Asociación Brasileira de Antropología (ABA) conjuntamente con otras instituciones públicas y con los propios Guaraní Kaiowá y Guaraní Nandéva, por intermedio de sus líderes y asociaciones, estuvieron a lo largo de la última década, periódica y sistemáticamente, llamando la atención para lo que estaba sucediendo en el Mato Grosso del Sur y para las acciones y omisiones del Estado brasileiro. A continuación mencionaremos algunos hechos que hemos venido señalando y denunciando a lo largo de la última década.

Al tener conocimiento de que en la madrugada del día 8 de agosto de 2011 un grupo Kaiowá había decidido retornar al territorio Pyelito Kue-Mbarakay, área localizada en el municipio de Iguatemi/MS, la ABA solicitó información del Ministerio de Justicia (MJ) y de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) sobre las medidas adoptadas frente a los graves acontecimientos en el municipio de Iguatemi/MS. En julio de 2003 un grupo intentó retornar y dos días después los pistoleros de las haciendas invadieron el campamento de los indígenas y los expulsaron con extrema violencia, los torturaron y fracturaron las piernas y brazos de mujeres, niños y ancianos.

De la misma manera, en diciembre de 2009 fue atacada una comunidad Guaraní Kaiowá recién acampada en el margen de una carretera de tierra en el municipio de Iguatemi para reivindicar Mbarakay, su territorio de ocupación tradicional. Las personas vieron llegar varios vehículos sumados a una decena de hombres encapuchados, buscando a Adélio Rodrigues, el líder político de la comunidad. Gritando en busca de “el peludo”, los encapuchados golpeaban y maltrataban a las personas, halándoles los cabellos. El chamán Atanásio Teixeira, de 70 años de edad, una hija y un nieto, entre varias personas, fueron duramente golpeados y heridos con balas de goma. El líder político no fue encontrado apenas porque se había retirado del campamento un poco antes de la llegada de los invasores. Sin embargo un hijo suyo, Arcelino Oliveira Teixeira, de 18 años de edad, fue llevado por los agresores y no se tuvieron más noticias suyas. Sobre este episodio, consta en el sitio web de la Procuraduría de la República en Mato Grosso del Sur, que “el Ministerio Público Federal (MPF) en Dorados pidió la apertura de una investigación en la Policía Federal en Naviraí para investigar el crimen. Fueron encontradas decenas de cartuchos de munición calibre 12 anti motines (balas de goma) y hay indicios de formación de una milicia armada”.¹

En octubre de 2009, una comunidad Guaraní Ñandéva recién acampada para reivindicar *Ypo'i*, su territorio de ocupación tradicional, en el municipio de Paranhos (MS), fue atacada por decenas de hombres armados. Sin ningún intento de diálogo los hombres golpearon violentamente a los indígenas (hombres, mujeres, ancianos y niños) y dispararon tiros en varias direcciones. Para escapar de las agresiones, los indígenas se dispersaron. Dos profesores indígenas, Genivaldo Vera y Rolindo Vera, fueron arrastrados por el cabello y llevados por los agresores. Solamente días después del ataque el cuerpo de uno de ellos fue encontrado con marcas de violencia, preso a la rama de un árbol, en un río (el *Ypo'i*), a una distancia de 30 kilómetros del lugar donde fueron atacados. Del otro profesor, no se tienen noticias hasta el día de hoy.²

En agosto de 2011, en una nueva tentativa de retornar al territorio reivindicado, los grupos de *Mbarakay* y de la comunidad vecina de *Pyelito* sufrieron diversos ataques semejantes, con balas de goma, que hirieron a varias personas. Cuatro meses después, el 18 de noviembre de 2011, fue atacado el líder político y espiritual de la comunidad de Guaiviry, que recientemente había acampado al interior de espacios indicados por él como lugares de ocupación tradicional. De acuerdo a los relatos de testigos, el señor Nísio, de 59 años de edad, murió después de ser golpeado en la cabeza, el tórax y los brazos, y su

¹ El Ministerio Público Federal (MPF) trata el caso como una acción de genocidio, ya que fue cometida violencia motivada por cuestiones étnicas contra una colectividad indígena. Inclusive en el sitio web consta que “en las fotos tomadas es posible ver las marcas del ataque al campamento indígena, como los lugares de alojamiento, las pertenencias y los alimentos quemados”. Para mayores informaciones ver: www.prms.mpf.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2011/09/

² En este episodio el Ministerio Público Federal en Mato Grosso del Sur denunció a seis personas, entre los que se encuentran políticos y hacendados de la región. Son acusados por homicidio calificado, ocultamiento de cadáveres, disparos con armas de fuego y lesiones corporales contra ancianos. Mayores informaciones en: www.prms.mpf.gov.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2011/11

cuerpo fue llevado en una camioneta, junto con dos adolescentes y un niño de cinco años de edad. Otras personas fueron heridas con balas de goma.

Del mismo modo, en octubre de 2012, otro grupo Guaraní Kaiowá, formado por las comunidades de Pyelito Kue y Mbarakay, reocupó una ínfima fracción de su territorio y ofreció resistencia tenaz a una decisión de reintegración de propiedad. Este hecho generó una amplia e inaudita manifestación popular de apoyo en las redes sociales. De esto resultó en ese momento (específicamente el 25 de octubre de 2012), una manifestación de la FUNAI, por medio de una nota en su página de internet, en la que resaltaba “la gravedad de la situación de los Guaraní y Kaiowá” en el Mato Grosso del Sur. Indicaba que representantes de esta institución participaron de una gran asamblea de estos dos pueblos (conocida como Aty Guassu) y expresaba su posición: “la FUNAI reafirma, así, su compromiso de aprobar los Informes Circunstanciados de Identificación y Delimitación de tierras indígenas Guaraní y Kaiowá en el Cono Sur / MS, dentro de los plazos pactados en la reunión Aty Guassu”.

En febrero de 2013 la ABA solicitó a las autoridades la investigación rigurosa del ataque sufrido por un grupo de líderes Guaraní Kaiowá y Guaraní Ñandéva, promovido por pistoleros de haciendas localizadas en el municipio de Caarapó – MS. En esa ocasión, un adolescente Guaraní Kaiowá fue asesinado a tiros de balas en las proximidades de la Reserva/ Aldea Tey'i kue/Caarapó. También se solicitó que fueran puestas en práctica medidas para garantizar la seguridad física de los cerca de 200 indígenas acampados en el lugar, ya que había riesgo de un nuevo ataque de los pistoleros y, sobre todo, la aceleración de los procedimientos para la delimitación y regularización de sus tierras.

Dos meses después de este ataque, el 18 de abril de 2013 nos manifestamos públicamente por la necesidad imperativa de la observancia de los derechos de los Guaraní Kaiowa y Guaraní Ñandéva en el Mato Grosso del Sur. Son más de 50 mil individuos (es uno de los mayores grupos indígenas del país) forzados a vivir en espacios ínfimos debido a un proceso de expropiación de sus territorios tradicionales; en consecuencia padecen de hinchazón poblacional, presentando altas tasas de violencia y suicidio, además de una situación económica extremadamente precaria. La nota fue dirigida a la presidenta Dilma Rousseff y protocolada en la Presidencia de la República el día 30 de abril de 2013, siendo firmada, inclusive, por la Sociedad para el Progreso de la Ciencia (SBPC), la Sociedad Científica de Estudios del Arte (CESA), la Asociación Nacional de Posgrados en Planeamiento Urbano y Regional (ANPUR) y la Sociedad Brasileira de Psicología (SBP) (Oficio nº 015/2013/ABA/PRES).

En ella recordamos que por cuenta de este cuadro y de la tenaz reivindicación territorial de los Guaraní Kaiowa y Guaraní Ñandéva el Estado nacional colocó en campo seis grupos de trabajo para la identificación y delimitación territorial. Iniciados hace cerca de cinco años, estos estudios tuvieron enormes dificultades para ser realizados, debido a las continuas injerencias políticas y acciones judiciales promovidas por segmentos ruralistas. Dichas acciones redundaron en innumerables paralizaciones de los procesos administrativos, así como en la instauración de un clima de violencia local, que resultó en el asesinato de varios indígenas y en la hostilidad hacia los antropólogos responsables por esos trabajos.

No obstante estas dificultades, la mayoría de los informes circunstanciados fue terminada. Sin embargo, solo uno de ellos había sido publicado, en enero de 2013: el informe de la Tierra Indígena Iguatemepegua I (compuesta por *Pyelito Kue* y *Mbarakay*). Esto generó, de inmediato, reacciones por parte de los ruralistas, los cuales, ejerciendo presión junto a la Casa Civil, solicitaron la suspensión de los demás

procesos, buscando impedir la publicación de los respectivos informes. Ante este hecho, requerimos celeridad en los procedimientos de regularización territorial en el Mato Grosso del Sur, con la publicación inmediata de los mencionados informes, y la búsqueda de caminos eficaces para la garantía de la posesión de la tierra, imprescindibles para la reproducción física y cultural de las familias indígenas.

Pero los hechos se precipitaron una vez más, mostrando la necesidad de acciones concretas y urgentes. Pocos días después de aquel evento, en mayo de 2013 ocurre la trágica muerte del profesor Oziel Gabriel, del pueblo indígena Terena. Una “mesa de negociación” es formada, mediada por el Consejo Nacional de Justicia y con participación de integrantes del Gobierno Federal. La acción se mostró paliativa, sin medios ni voluntad de decisión, las negociaciones en la mesa se estancaron. O peor, el Ejecutivo (principalmente por obra del Ministro de Justicia, mas no exclusivamente) decidió la paralización de los procesos administrativos de demarcación de tierras indígenas realizados por la FUNAI, lesionando así el pleno derecho territorial indígena, no solo en el Mato Grosso del Sur, sino en todo el país.

En junio pasado (2015), una vez más ocurrieron actos de violencia cometidos por productores rurales en el campamento de los indígenas Guaraní Kaiowá de la comunidad de Kurusu Amba, en el municipio de Coronel Sapucaia, en el Mato Grosso del Sur. De acuerdo con informaciones de la prensa digital, tales actos de violencia redundaron en la destrucción y el incendio de campamentos improvisados por los indígenas, en la muerte de un niño de cerca de un año de edad, carbonizado, y en la desaparición de por lo menos otras dos personas indígenas. Es la cuarta vez que los Kaiowá de Kurusu Amba son rechazados en las tentativas de retorno a su territorio, frente a la inoperancia del estado en cumplir su papel constitucional de garantizar esos territorios. En todos los intentos, recibieron una respuesta violenta, con varias muertes y graves heridas entre la población indígena.

Volviendo al episodio de Kurusu Amba, es posible afirmar que hubo cambios significativos en el comportamiento de las fuerzas policiales que operan en el Mato Grosso del Sur, cuando se compara con la actuación vigente en la década de 1990 y a comienzos de los años 2000. La Policía Federal, que antes representaba una seguridad para la integridad física de los indígenas, en los últimos tiempos ha demostrado formas de obstrucción para actuar oportunamente e impedir o limitar actos de violencia. En consecuencia, y con la intención de llenar ese vacío de actuación, tuvieron que ser llevados grupos de la Fuerza Nacional, contando, sin embargo, con pocos efectivos y de forma sumamente intermitente. Completando este cuadro negativo, en los últimos años los productores rurales de la región vienen contratando empresas especializadas en seguridad, que pasaron a actuar organizadas como milicias paramilitares, ampliando las tensiones, aumentando los actos de violencia y llenando el clima de inseguridad y terror entre los indígenas. Entre éstas, la empresa Gaspem Segurança, como denuncia el propio Ministerio Público Federal del Mato Grosso del Sur, fue responsabilizada por las muertes de varios líderes indígenas, lo que llevó a su propietario a prisión domiciliar.³

³ La empresa Gaspem (Grupo de Apoyo, Seguridad Privada y Empresarial) actúa en Dorados y la región desde 1996. Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público Federal lo llevaron a concluir que Gaspem es “un grupo organizado que disemina violencia contra los Guaraní Kaiowá del cono sur del estado de Mato Grosso del Sur a través de personas brutales denominadas ‘vigilantes’, la mayoría de las veces sin instrucción para el ejercicio de la actividad, portando armas pesadas y municiones, con la finalidad de practicar actos contrarios al ordenamiento jurídico y la seguridad pública”. Para mayor información ver:

<http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-deimprensa/noticias/2015/06/decisao-livra-dono-da-gaspem-de-pagar-r-480-mil-a-vitimas-de-violencia-em-ms>

Resumiendo, es posible afirmar que los incumplimientos administrativos que obstaculizaron la publicación de los informes de identificación y delimitación de tierras indígenas, la inseguridad debida a la ineficiencia de los órganos policiales, la actuación corriente y muchas veces impune de empresas de seguridad y de sicarios, unidos a la judicialización de los procesos de demarcación de tierras, han contribuido para inflamar en el Mato Grosso del Sur un clima de tensión, en el cual se consuma de forma paulatina un genocidio claramente anunciado. Al manifestar ciertas actitudes y promover ciertas prácticas y políticas, el Estado brasileiro, del ejecutivo al judicial, pasando por el Congreso Nacional, se convierte, inevitablemente en participante de este proceso, responsabilidad esta que la ABA viene aquí a resaltar y denunciar.

Associação Brasileira de Antropologia y su Comisión de Asuntos Indígenas
Brasília, 14/10/2015.